

1. Según establece el artículo 36.1 de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), ¿cuál es la función principal del delegado de protección de datos en relación con las autoridades de control?

- a) Actuar como interlocutor del responsable o encargado del tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas.
- b) Supervisar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el Comité Europeo de Protección de Datos en nombre del responsable.
- c) Asumir la representación legal del responsable del tratamiento en los procedimientos sancionadores ante la Audiencia Nacional.
- d) Garantizar que el responsable del tratamiento cumpla con las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos mediante auditorías externas.

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 57.1.a) de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), las autoridades autonómicas de protección de datos ejercen sus competencias sobre los tratamientos de los que sean responsables:

- a) Las entidades privadas con sede social en su territorio que realicen tratamientos masivos de datos.
- b) Las instituciones del sector público de su Comunidad Autónoma, las Entidades Locales de su territorio y los gestores de servicios públicos.
- c) Cualquier responsable del tratamiento, sea público o privado, que trate datos personales de residentes en el ámbito geográfico de su Comunidad.
- d) Todas las anteriores son correctas.

3. De acuerdo con el artículo 70.1 de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), ¿cuál de los siguientes sujetos NO está exento del régimen sancionador establecido en dicha norma?

- a) El delegado de protección de datos nombrado por el responsable.
- b) El personal encargado de la gestión de la Oficina Judicial en procesos de su competencia.
- c) El representante de un responsable del tratamiento no establecido en el territorio de la Unión Europea.
- d) Las entidades de certificación debidamente acreditadas.

4. En relación con el plazo máximo para resolver y notificar los procedimientos, el artículo 21.3 de la Ley 39/2015 (LPAC) establece que, cuando las normas reguladoras no lo fijan, este plazo será de:

- a) Un mes contado desde la fecha del acuerdo de iniciación o de la recepción de la solicitud.
- b) Dos meses a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria o acto de inicio.
- c) Tres meses, salvo que por ley se establezca uno mayor o así lo prevea el Derecho de la Unión Europea.
- d) Seis meses como norma general para garantizar la seguridad jurídica de los interesados.

5. Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 (LPAC), ¿qué derecho asiste a los interesados respecto a la aportación de documentos al procedimiento?

- a) Derecho a no aportar documentos originales, debiendo la Administración conformarse siempre con copias simples digitales.
- b) Derecho a oponerse en cualquier caso a que la Administración consulte sus datos si estos son de carácter personal o fiscal.
- c) Derecho a que la Administración actuante recabe los documentos necesarios de otras Administraciones sin informar al interesado.
- d) Derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración.

6. De acuerdo con el artículo 33.1 de la Ley 39/2015 (LPAC), en la tramitación de urgencia se reducen a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, con excepción de:

- a) Los plazos relativos al trámite de audiencia y alegaciones.
- b) Los plazos de presentación de solicitudes y de recursos.
- c) Los plazos para la emisión de informes de carácter preceptivo.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

7. En relación con el principio de inderogabilidad singular recogido en el artículo 37.1 de la Ley 39/2015 (LPAC), las resoluciones administrativas de carácter particular:

- a) Pueden excepcionar lo dispuesto en un reglamento cuando concurran razones de urgencia o interés general.
- b) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
- c) Tienen primacía sobre las disposiciones de carácter general cuando se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales.
- d) Podrán derogar disposiciones generales si estas no han sido publicadas en el boletín oficial correspondiente.

8. Según establece el artículo 51 de la Ley 39/2015 (LPAC), el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones goza de la potestad de:

- a) Anular la totalidad del procedimiento para garantizar el principio de legalidad desde el inicio.
- b) Sustituir los trámites viciados por otros nuevos que produzcan efectos favorables al interesado.
- c) Conservar aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción que originó la nulidad.
- d) Convalidar de oficio los actos anulables si el vicio consiste en una incompetencia jerárquica manifiesta.

9. Conforme al artículo 63.1 de la Ley 39/2015 (LPAC), en los procedimientos de naturaleza sancionadora, ¿cuál es la regla respecto a la organización de las fases?

- a) La fase de instrucción y la de resolución pueden recaer en el mismo órgano si este tiene rango de Dirección General.
- b) No es obligatoria la separación de fases cuando se trate de procedimientos de tramitación simplificada.
- c) La Administración puede decidir libremente si separa las fases atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia administrativa.
- d) Se debe garantizar la debida separación entre la fase instructora y la fase sancionadora, que deben encomendarse a órganos distintos.

10. Según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 39/2015 (LPAC), ¿cuál de las siguientes cuestiones incidentales suspende la tramitación del procedimiento?

- a) La recusación.
- b) La nulidad de actuaciones.
- c) La falta de acreditación de la representación.
- d) La solicitud de informes preceptivos.

11. De acuerdo con el artículo 80.1 de la Ley 39/2015 (LPAC), salvo disposición expresa en contrario, ¿cuál es la naturaleza de los informes en el procedimiento administrativo?

- a) Serán siempre preceptivos y vinculantes para asegurar la objetividad de la resolución.
- b) Serán facultativos y vinculantes en procedimientos de responsabilidad patrimonial.
- c) Serán preceptivos y no vinculantes si emanan de órganos consultivos específicos.
- d) Serán facultativos y no vinculantes.

12. Según el artículo 81.2 de la Ley 39/2015 (LPAC), en los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado (o equivalente autonómico) cuando la indemnización reclamada sea:

- a) Superior a 30.000 euros.
- b) Igual o superior a 50.000 euros, o la cuantía que establezca la legislación autonómica.
- c) Superior a 60.000 euros, independientemente de lo que establezca la norma autonómica.
- d) Igual o superior a 100.000 euros para garantizar el control de los fondos públicos.

13. Según establece el artículo 114.2 de la Ley 39/2015, en el ámbito de la Administración General del Estado, ¿qué actos ponen fin a la vía administrativa?

- a) Los dictados por Subdirectores Generales en cualquier materia de gestión ordinaria.
- b) Los actos emanados de órganos que posean un superior jerárquico inmediato al que recurrir.
- c) Los actos administrativos emanados de los miembros y órganos del Gobierno.
- d) Únicamente las resoluciones de los recursos de alzada dictadas expresamente por los Ministros.

14. Conforme al principio de transparencia recogido en el artículo 129.5 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas posibilitarán en el proceso de elaboración de normas:

- a) El acceso sencillo y universal a la normativa, a los documentos de su elaboración y la participación activa de los potenciales destinatarios.
- b) El acceso restringido a los borradores técnicos para evitar interferencias de grupos de interés externos.
- c) La consulta pública únicamente en la fase de publicación definitiva en el Boletín Oficial correspondiente.
- d) El anonimato total de los redactores de la norma para garantizar su independencia e imparcialidad técnica.

15. En relación con el uso de Microsoft Outlook en la UPV, ¿en qué circunstancia técnica se producirá un error de firma al intentar enviar un correo electrónico?

- a) Cuando el certificado digital haya sido emitido por la FNMT en lugar de la autoridad de certificación de la ACCV.
- b) Si el usuario intenta enviar un mensaje con un tamaño superior a 10 megabytes incluyendo archivos adjuntos.
- c) Cuando el sistema operativo no se encuentre actualizado a la última versión disponible del fabricante del software.
- d) Si no existe una coincidencia estricta entre la cuenta de correo configurada y el nombre alternativo del sujeto en el certificado.

16. De acuerdo con la normativa de la Sede Electrónica de la UPV, ¿cómo se determina la fecha y hora oficial a efectos del cómputo de plazos en el registro electrónico?

- a) Se ajusta automáticamente a la zona horaria del dispositivo local u ordenador desde el que el usuario realiza el trámite.
- b) Se sincroniza con el horario de apertura y cierre de la oficina física de registro de la universidad.
- c) Se rige exclusivamente por la fecha y hora oficial del servidor de la UPV, invalidando la hora del dispositivo local del usuario.
- d) Se calcula mediante una media de tiempo real entre el servidor central de la Generalitat y el nodo local de la UPV.

17. Según establece el artículo 8.1 de la Ley 40/2015, el ejercicio de la competencia atribuida a los órganos administrativos es:

- a) Renunciable siempre que existan razones de urgencia o interés general que justifiquen el traslado al superior.
- b) Irrenunciable, debiendo ejercerse por el órgano que la tenga atribuida como propia, salvo delegación o avocación.
- c) Facultativo, pudiendo el titular del órgano decidir no ejercerla si carece de medios materiales o personales suficientes.
- d) Transferible de forma permanente mediante convenio sin necesidad de modificar las normas de atribución.

18. En relación con la exigencia de responsabilidad patrimonial, el artículo 36.1 de la Ley 40/2015 determina que:

- a) Los particulares exigirán directamente a la Administración las indemnizaciones, no directamente al personal a su servicio.
- b) El interesado debe demandar solidariamente tanto al empleado público causante del daño como a la Administración.
- c) Solo cabe reclamar a la Administración cuando el personal responsable haya actuado con dolo o negligencia grave acreditada.
- d) La reclamación debe dirigirse en primera instancia contra el superior jerárquico del funcionario que causó la lesión.

19. Conforme a lo dispuesto en el artículo 89.2 de la Ley 40/2015, los organismos públicos estatales tienen expresamente prohibido el ejercicio de:

- a) La potestad expropiatoria.
- b) La potestad de fomento mediante la concesión de subvenciones públicas.
- c) La capacidad para dictar actos administrativos con efectos frente a terceros.
- d) La gestión de servicios públicos que conlleven una contraprestación económica.

20. De acuerdo con el artículo 91.3 de la Ley 40/2015, ¿cuál de los siguientes documentos es imprescindible para el anteproyecto de creación de un organismo público?

- a) Una memoria de impacto ambiental validada por el Ministerio para la Transición Ecológica.
- b) La propuesta de estatutos, el plan inicial de actuación y el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda.
- c) Un informe de la Abogacía del Estado que acredite la imposibilidad de gestión directa por el Ministerio.
- d) Una auditoría de recursos humanos que certifique la inexistencia de duplicidades con órganos autonómicos.

21. En relación con el régimen patrimonial de los organismos autónomos, el artículo 101.1 de la Ley 40/2015 establece que:

- a) Carecen de patrimonio propio, gestionando únicamente los bienes que les adscriba el Ministerio de adscripción.
- b) Tienen un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por los bienes y derechos de los que sean titulares.
- c) Su patrimonio está integrado obligatoriamente en el Patrimonio del Estado, sin distinción jurídica alguna.
- d) Solo podrán ser titulares de bienes muebles, quedando los inmuebles bajo la titularidad directa de la Hacienda Pública.

22. Según establece el artículo 117.4 de la Ley 40/2015, el personal de las sociedades mercantiles estatales, incluido el directivo, se rige por:

- a) Las normas de Derecho Administrativo aplicables a los funcionarios de carrera del Estado.
- b) El Derecho laboral, así como por las normas que le sean de aplicación en materia presupuestaria.
- c) Exclusivamente por los convenios colectivos sectoriales, sin sujeción a límites presupuestarios anuales.
- d) El estatuto del personal directivo público profesional regulado en el artículo 13 del TREBEP.

23. Conforme al artículo 147.1 de la Ley 40/2015, la Conferencia Sectorial se define como un órgano de cooperación:

- a) Bilateral y permanente entre el Estado y una única Comunidad Autónoma para tratar asuntos económicos.
- b) Técnico compuesto exclusivamente por funcionarios de carrera de los servicios comunes de los Ministerios.
- c) Multilateral de ámbito sectorial que reúne al Ministro competente y a los miembros de los Consejos de Gobierno autonómicos.
- d) Consultivo integrado por representantes de la sociedad civil y las Administraciones para evaluar políticas públicas.

24. De acuerdo con el artículo 9.3 de la Ley 1/2022 de Transparencia de la Comunitat Valenciana, sobre la información pública se establece que:

- a) La Administración es la única responsable del uso posterior que se haga de la información descargada de su portal.
- b) Quienes recopilen datos publicados son responsables de su uso y responden por infracciones de protección de datos.
- c) La reutilización de datos personales publicados está prohibida en todo caso, incluso si están seudonimizados.

d) Cualquier ciudadano puede utilizar los datos del portal sin sujeción a la normativa de protección de datos personales.

25. Según la Ley 1/2022 de Transparencia de la Comunitat Valenciana, ¿con qué periodicidad mínima debe realizarse la publicación de la información relativa a los contratos menores?

- a) La publicación debe ser, al menos, trimestral, incluyendo las diferentes ofertas que se realizaron.
- b) La publicación será de carácter mensual para todos los contratos que superen los 3.000 euros.
- c) Se realizará una publicación anual agregada en el primer trimestre del año siguiente.
- d) No existe obligación de publicación trimestral para contratos menores, basta con el perfil del contratante.

26. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2007, ¿qué consideración jurídica tiene el trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad?

- a) Constituye discriminación directa por razón de sexo.
- b) Se considera una infracción laboral grave de carácter administrativo.
- c) Constituye un supuesto de discriminación indirecta por razón de género.
- d) Es una práctica arbitraria prohibida por el principio de seguridad jurídica.

27. El artículo 14.2 de la Ley Orgánica 3/2007 establece como criterio general de actuación de los Poderes Públicos la integración del principio de igualdad en:

- a) Únicamente en la política laboral y de fomento del empleo femenino.
- b) En las políticas de fomento del empleo y los planes estratégicos de cohesión territorial.
- c) El conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística para evitar la segregación.
- d) En las disposiciones normativas relativas al régimen estatutario de los funcionarios públicos.

28. En relación con la efectividad del principio de igualdad, ¿ante qué órgano debe el Gobierno dar cuenta periódicamente según el artículo 18 de la Ley Orgánica 3/2007?

- a) Ante el Defensor del Pueblo en su informe anual de gestión.
- b) Ante el Consejo de Participación de la Mujer con periodicidad bienal.
- c) Ante el Tribunal de Cuentas para verificar la ejecución presupuestaria de igualdad.
- d) Ante las Cortes Generales en los términos que se determinen reglamentariamente.

29. Según el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2007, ¿cuál es la obligación de los poderes públicos al elaborar sus estudios y estadísticas?

- a) Utilizar únicamente fuentes de datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística.
- b) Eliminar los datos identificativos de los sujetos para garantizar la plena protección de datos.
- c) Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo.
- d) Realizar encuestas trimestrales obligatorias sobre la brecha salarial en el sector privado.

30. ¿Sobre quién se ejerce la violencia de género que constituye el objeto de la Ley Orgánica 1/2004?

- a) Sobre cualquier persona del ámbito familiar que sufra maltrato físico o psicológico por parte de un familiar.
- b) Sobre los menores de edad y mujeres que convivan en el mismo domicilio familiar independientemente del vínculo.
- c) Sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
- d) Exclusivamente sobre las mujeres que ostenten un vínculo matrimonial vigente con el agresor en el momento de los hechos.

31. En el ámbito educativo de Bachillerato y Formación Profesional, ¿cuál es el objetivo del fomento de la igualdad según la Ley Orgánica 1/2004?

- a) El estudio técnico de las medidas cautelares aplicables en los procesos de violencia de género.
- b) El análisis crítico de las desigualdades de sexo para fomentar la igualdad real y efectiva.
- c) La segregación por sexos en las materias relacionadas con la educación física para evitar conflictos.
- d) Únicamente la formación en defensa personal para las alumnas matriculadas en centros públicos.

32. ¿Qué garantiza el Sistema Público de Salud a las mujeres víctimas de violencia de género según el artículo 19 bis.1 de la Ley Orgánica 1/2004?

- a) El derecho a la atención sanitaria y seguimiento hasta la total recuperación de secuelas físicas y psíquicas.
- b) La gratuidad total de todos los medicamentos prescritos por cualquier patología médica ordinaria.
- c) El ingreso hospitalario preferente en centros privados especializados con cargo a fondos públicos.
- d) La asignación de un médico de cabecera especializado obligatoriamente en psicología forense.

33. ¿Qué implica el principio de sometimiento pleno de la Administración a la Ley y al Derecho recogido en el artículo 103.1 de la Constitución?

- a) Que la Administración puede dictar normas que contradigan las leyes siempre que concurren razones de urgencia.
- b) La primacía jerárquica de los actos administrativos sobre las disposiciones de carácter general.
- c) Que el Gobierno no está sujeto al control jurisdiccional en los actos que califique como políticos.
- d) Una posición de infraordenación de la Administración respecto al bloque jurídico u ordenamiento completo.

34. Dentro de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo, ¿cuáles tienen el carácter de fuentes directas subsidiarias?

- a) La ley orgánica y los reales decretos legislativos aprobados por el Gobierno.
- b) Los reglamentos independientes y las instrucciones u órdenes de servicio internas.
- c) Los tratados internacionales publicados y el derecho derivado de la Unión Europea.
- d) La costumbre y los principios generales del derecho, aplicables en defecto de normas primarias.

35. Según el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), ¿cuál es la naturaleza de las recomendaciones y los dictámenes?

- a) Tienen carácter obligatorio y vinculante para todos los Estados miembros de la Unión.
- b) Son normas con rango de ley que deben ser obligatoriamente traspuestas al derecho interno.
- c) Son actos legislativos que requieren la aprobación previa del Parlamento Europeo.
- d) No serán vinculantes, limitándose a sugerir conductas o a expresar opiniones sobre un asunto.

36. ¿Cuál es la característica principal de los reglamentos independientes o extra legem?

- a) Se dictan exclusivamente para desarrollar de forma detallada y fiel una ley preexistente.
- b) Tienen el mismo rango que la ley al ser dictados por el Gobierno en casos de necesidad.
- c) Requieren siempre para su aprobación un dictamen preceptivo y favorable del Consejo de Estado.
- d) Regulan materias no reservadas a la ley, limitándose usualmente a lo organizativo o relaciones de sujeción especial.

37. Dentro de la clasificación de los reglamentos por su origen, ¿cómo se denominan las normas reglamentarias estatales emanadas del Consejo de Ministros o del Presidente del Gobierno?

- a) Reales Decretos.
- b) Órdenes Ministeriales.
- c) Decretos Legislativos.
- d) Resoluciones Administrativas.

38. De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 39/2015 (LPAC), el principio de inderogabilidad singular implica que:

- a) Un reglamento puede derogar una ley si esta es de carácter particular o afecta a un solo administrado.
- b) Los actos administrativos de carácter general tienen primacía sobre los reglamentos del mismo rango jerárquico.
- c) Una resolución administrativa de carácter particular no podrá vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general.
- d) Solo los órganos de superior jerarquía pueden dictar actos que excepcionen el cumplimiento de un reglamento.

39. Según el artículo 27.1.a) de la Ley 9/2017 (LCSP), ¿sobre qué aspectos de los contratos administrativos es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo?

- a) Sobre las cuestiones relativas a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción.
- b) Únicamente sobre las controversias que se susciten en la fase de preparación y selección del contratista.
- c) Exclusivamente sobre los efectos y la extinción, quedando la preparación bajo la jurisdicción civil.
- d) Sobre las reclamaciones por daños y perjuicios derivadas de incumplimientos de la normativa laboral por parte del contratista.

40. ¿Cuál de los siguientes es un objetivo de la Estrategia Nacional de Contratación Pública según lo dispuesto en el artículo 334.2 de la Ley 9/2017 (LCSP)?

- a) Combatir la corrupción, profesionalizar a los agentes públicos, promover la eficiencia económica y generalizar la contratación electrónica.
- b) Centralizar todos los contratos de obras de las Comunidades Autónomas en la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
- c) Reducir la participación de las PYMES para favorecer la agregación de la demanda mediante grandes operadores económicos.
- d) Establecer un sistema de precios máximos fijos no revisables para todos los contratos de suministros de energía y carburantes.

41. Conforme al artículo 94.2 de la Ley 9/2017 (LCSP), en relación con el reconocimiento de certificados de gestión medioambiental, los órganos de contratación:

- a) Solo podrán aceptar certificados emitidos por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) o autoridades españolas.
- b) Deben exigir que el licitador esté inscrito obligatoriamente en el registro EMAS de la Comunidad Autónoma donde se ejecute el contrato.
- c) Reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
- d) Podrán rechazar cualquier prueba de medidas equivalentes que no consista en un certificado oficial de un organismo de la UE.

42. De acuerdo con el artículo 73.1 de la Ley 9/2017 (LCSP), ¿qué autoridad tiene la competencia para extender excepcionalmente los efectos de una prohibición de contratar al conjunto del sector público?

- a) El Presidente del Gobierno a propuesta motivada de la Mesa del Congreso de los Diputados.
- b) El Ministro de Hacienda y Función Pública, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
- c) El Tribunal de Cuentas, tras la fiscalización de oficio de los contratos menores del ejercicio presupuestario anterior.
- d) La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación de forma unilateral y vinculante.

43. Según establece el artículo 116.1 de la Ley 9/2017 (LCSP), ¿cuál es el trámite que inicia el expediente de contratación por parte de las Administraciones Públicas?

- a) La motivación de la necesidad del contrato en los términos previstos en la ley.
- b) La publicación inmediata de la resolución de adjudicación directa en el Boletín Oficial del Estado.
- c) La obtención de un informe de sostenibilidad financiera que garantice el pago total de la obra antes de su inicio.
- d) La realización de una consulta pública previa entre los licitadores inscritos en el Registro de Licitadores.

44. En relación con las garantías prestadas por terceros a favor del contratista, el artículo 112.1 de la Ley 9/2017 (LCSP) determina que:

- a) Las personas o entidades que presten dichas garantías tienen expresamente prohibido el uso del beneficio de excusión.
- b) El fiador tendrá derecho legal a exigir que el acreedor agote primero el patrimonio del contratista principal.
- c) Las garantías solo podrán prestarse mediante aval bancario de entidades financieras con sede en territorio nacional.
- d) El contratista queda exento de prestar garantía si el objeto del contrato consiste exclusivamente en servicios intelectuales.

45. Según el artículo 156.2 de la Ley 9/2017 (LCSP), en el procedimiento abierto para contratos sujetos a regulación armonizada (SARA), ¿cuál es el plazo general mínimo para la presentación de proposiciones?

- a) 15 días naturales contados desde la publicación del anuncio en el perfil de contratante de la entidad.
- b) 35 días (obras, suministros y servicios) o 30 días (concesiones) desde el envío del anuncio al DOUE.
- c) 60 días hábiles a partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo por el contratista.
- d) 10 días naturales en el caso de que se trate de un procedimiento tramitado por la vía de urgencia.

46. Conforme al artículo 318.a) de la Ley 9/2017 (LCSP), ¿qué umbrales permiten a los entes del sector público que NO son Administraciones Públicas adjudicar contratos directamente?

- a) Cualquier contrato de obras o servicios cuyo presupuesto base de licitación sea inferior a 50.000 euros anuales.
- b) Únicamente aquellos contratos de suministros calificados como de emergencia sin límite de cuantía económica.
- c) Contratos de obras inferiores a 50.000 euros y contratos de suministros o servicios inferiores a 18.000 euros.
- d) Contratos de obras con valor estimado inferior a 40.000 euros y de suministros o servicios inferior a 15.000 euros.

47. De acuerdo con el artículo 198.4 de la Ley 9/2017 (LCSP), ¿en qué plazo tiene la Administración la obligación de abonar el precio del contrato?

- a) En los 15 días naturales siguientes a la recepción de la factura electrónica en el punto general de entrada.
- b) Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o documentos de conformidad.
- c) En el plazo de dos meses desde que el contratista presente la reclamación por escrito ante el órgano de contratación.
- d) Antes de que finalice el ejercicio presupuestario corriente en el que se realizó la entrega efectiva de la prestación.

48. En los contratos de concesión, según los artículos 270 y 290 de la Ley 9/2017 (LCSP), ¿cuándo procede el restablecimiento del equilibrio económico del contrato?

- a) Cuando la Administración realice modificaciones por interés público o actuaciones obligatorias que rompan sustancialmente su economía.
- b) Siempre que el concesionario sufra pérdidas económicas derivadas de un error en sus propias previsiones de demanda.
- c) Únicamente cuando la tasa de inflación anual supere el 5 por ciento, independientemente del riesgo operacional asumido.
- d) Cuando se produzca un cambio en la estructura accionarial de la empresa adjudicataria que afecte a sus costes indirectos.

## Soluciones

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | a | El artículo 36.1 de la LOPDGDD dispone que el delegado de protección de datos actuará como interlocutor del responsable o encargado del tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos.                                                                                                                                                                                         |
| 2  | b | El artículo 57.1.a) de la LOPDGDD establece que las autoridades autonómicas son competentes para el ejercicio de las funciones del Reglamento (UE) 2016/679 cuando los tratamientos sean responsabilidad de las entidades del sector público de su Comunidad Autónoma, de las Entidades Locales de su territorio o de gestores de servicios públicos de estas administraciones. La opción d es incorrecta al no ser correctas las opciones a y c. |
| 3  | d | El artículo 70.1 de la LOPDGDD enumera a los sujetos responsables, incluyendo expresamente a los responsables, encargados, representantes fuera de la UE y entidades de certificación. Por el contrario, el artículo 70.2 excluye expresamente al delegado de protección de datos de este régimen sancionador.                                                                                                                                    |
| 4  | c | Según el artículo 21.3 de la LPAC, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de tres meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5  | d | El artículo 28.2 de la LPAC establece que los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración.                                                                                                                                                                                                                           |
| 6  | b | El artículo 33.1 de la LPAC señala expresamente que en la tramitación de urgencia no se reducirán los plazos relativos a la presentación de solicitudes y de recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7  | b | El artículo 37.1 de la LPAC establece la prohibición de que las resoluciones administrativas de carácter particular vulneren una disposición de carácter general, incluso si aquellas proceden de un órgano de igual o superior jerarquía.                                                                                                                                                                                                        |
| 8  | c | El artículo 51 de la LPAC dispone que el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | d | El artículo 63.1 de la LPAC establece que los procedimientos sancionadores garantizarán la debida separación entre la fase instructora y la fase sancionadora, encomendándose a órganos distintos.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | a | El artículo 74 de la LPAC es tajante al señalar que las cuestiones incidentales que se susciten no suspenderán la tramitación del procedimiento, salvo la recusación.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | d | El artículo 80.1 de la LPAC establece que, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 | b | El artículo 81.2 de la LPAC indica que el dictamen es preceptivo cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o la cuantía que se establezca en la normativa autonómica.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | c | El artículo 114.2.a) de la LPACAP establece que, en el ámbito estatal, ponen fin a la vía administrativa los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | a | El artículo 129.5 de la LPACAP dispone que, en aplicación del principio de transparencia, las Administraciones posibilitarán el acceso a la normativa, documentos de elaboración y la participación activa de los destinatarios.                                                                                                                                                                                                                  |
| 15 | d | Según se detalla en la página 20 del Tema 13 (Sede Electrónica), Outlook arrojará un error de firma si la dirección configurada no coincide exactamente con la dirección grabada en el campo "Subject Alternative Name" del certificado.                                                                                                                                                                                                          |
| 16 | c | Tal como establece la normativa específica (página 11 del Tema 13), la Sede se rige estrictamente por la fecha y hora oficial del servidor de la UPV, siendo irrelevante la hora que marque el equipo del usuario.                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 | b | El artículo 8.1 de la LRJSP dispone que la competencia es irrenunciable y se ejercerá por el órgano que la tenga atribuida como propia, salvo delegación o avocación en los términos previstos en las leyes.                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | a | El artículo 36.1 de la LRJSP establece que los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños causados por el personal a su servicio.                                                              |
| 19 | a | El artículo 89.2 de la LRJSP señala que a los organismos públicos les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, salvo la potestad expropiatoria.                                                                       |
| 20 | b | El artículo 91.3 de la LRJSP exige que la propuesta de creación incluya la propuesta de estatutos, el plan inicial de actuación y el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda.                                                                        |
| 21 | b | Según el artículo 101.1 de la LRJSP, los organismos autónomos tendrán un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por los bienes y derechos de los que sean titulares.                                                                |
| 22 | b | El artículo 117.4 de la LRJSP dispone que tanto el personal ordinario como el directivo de estas sociedades se rigen por el Derecho laboral y las normas presupuestarias aplicables.                                                                                 |
| 23 | c | El artículo 147.1 de la LRJSP define la Conferencia Sectorial como el órgano multilateral de ámbito sectorial que reúne al Ministro competente y a los miembros de los Consejos de Gobierno de las CC.AA.                                                            |
| 24 | b | El artículo 9.3 de la Ley 1/2022 de la Generalitat establece que las personas o entidades que recopilen datos e información publicada son responsables del uso que realicen y responden de las infracciones de protección de datos.                                  |
| 25 | a | El artículo 20.1.r) de la Ley 1/2022 de la Generalitat establece que la publicación de la información relativa a los contratos menores se realizará, al menos, trimestralmente e incluirá las diferentes ofertas que se realizaron.                                  |
| 26 | a | El artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2007 señala expresamente que constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.                                                               |
| 27 | c | Según el artículo 14.2 de la Ley Orgánica 3/2007, los poderes públicos integrarán la igualdad en las políticas económica, laboral, social, cultural y artística para evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas.                          |
| 28 | d | El artículo 18 de la Ley Orgánica 3/2007 dispone que el Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad del que dará cuenta a las Cortes Generales.                            |
| 29 | c | El artículo 20.a) de la Ley Orgánica 3/2007 establece que los poderes públicos deben incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo.                                                              |
| 30 | c | El artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2004 establece que la violencia se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. |
| 31 | b | El artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2004 dispone que el sistema educativo incluirá la eliminación de obstáculos que dificultan la igualdad y fomentará el análisis crítico de las desigualdades de sexo.                                                              |
| 32 | a | El artículo 19 bis.1 de la Ley Orgánica 1/2004 garantiza a las víctimas el derecho a la atención sanitaria y al seguimiento de su estado de salud hasta su total recuperación de las secuelas derivadas de la violencia.                                             |
| 33 | d | El artículo 103.1 de la Constitución Española establece el sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, lo que sitúa a la Administración en una posición de subordinación respecto a la totalidad del bloque jurídico.                                                  |
| 34 | d | Según la clasificación de las fuentes tratada en el Tema 18, la costumbre y los principios generales del derecho se consideran fuentes directas subsidiarias, aplicables solo cuando no existan normas primarias aplicables al caso.                                 |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | d | El artículo 288 del TFUE establece que las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes, teniendo las primeras la finalidad de sugerir una conducta y los segundos la de expresar una opinión.                                                                             |
| 36 | d | Los reglamentos independientes son aquellos que regulan materias donde no existe reserva de ley, limitándose habitualmente al ámbito de la organización administrativa o a las relaciones de sujeción especial.                                                                     |
| 37 | a | Según se detalla en la clasificación por origen de las fuentes, los reglamentos estatales toman la forma de Reales Decretos cuando emanan del Gobierno o de su Presidente.                                                                                                          |
| 38 | c | El artículo 37.1 de la LPAC establece que las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.         |
| 39 | a | El artículo 27.1.a) de la LCSP determina que la jurisdicción contencioso-administrativa es competente para conocer de las cuestiones relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos.                                  |
| 40 | a | El artículo 334.2 de la LCSP señala que la Estrategia Nacional se diseñará para combatir la corrupción e irregularidades, incrementar la profesionalización de los agentes, promover la eficiencia económica y generalizar el uso de la contratación electrónica.                   |
| 41 | c | Según el artículo 94.2 de la LCSP, los órganos de contratación reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea y aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes que presente el licitador.         |
| 42 | b | El artículo 73.1 de la LCSP establece que la extensión de efectos de la prohibición de contratar a todo el sector público se realizará por el Ministro de Hacienda, previa propuesta de la Junta Consultiva y a solicitud de la Comunidad Autónoma o Entidad Local correspondiente. |
| 43 | a | El artículo 116.1 de la LCSP dispone que la celebración de contratos requerirá la previa tramitación del expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28.                                 |
| 44 | a | La normativa de contratación pública establece que las entidades que presten garantías a favor del contratista no pueden utilizar el beneficio de excusión, asegurando así la ejecución inmediata por parte de la Administración.                                                   |
| 45 | b | El artículo 156.2 de la LCSP fija un plazo mínimo de 35 días para contratos de obras, suministros y servicios, y de 30 días para concesiones de obras y servicios, contados desde el envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la UE.                        |
| 46 | d | El artículo 318.a) de la LCSP permite la adjudicación directa por parte de estas entidades (PANAPs) cuando el valor estimado sea inferior a 40.000 euros en obras o a 15.000 euros en servicios o suministros.                                                                      |
| 47 | b | El artículo 198.4 de la LCSP establece que la Administración debe abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos de conformidad de los bienes o servicios.                                      |
| 48 | a | El artículo 290.4 de la LCSP dispone que el equilibrio económico debe restablecerse cuando la Administración modifique el contrato por interés público o dicte actuaciones obligatorias que determinen la ruptura sustancial de la economía de la concesión.                        |